

D2

Nuevas revelaciones sobre los sangrientos sucesos de Montejurra de 1976, pocos meses tras la muerte del dictador Franco, sin iniciarse todavía la Transición, que revelan un plan para acabar con el partido carlista de orientación progresista. La concentración acabó con dos muertos asesinados por grupos de ultraderecha



GRUPO DE ATACANTES PRÓXIMO AL MONASTERIO. A la derecha, el "hombre de la gabardina" que disparó contra Aniano Jiménez. En el centro —con gafas oscuras y cazadora clara— el neofascista italiano Augusto Cauchi (Ordine Nuovo); a su izquierda, con bigote, Delle Chiaie (Avanguardia Nazionale) y, a su inmediata derecha, también con bigote y boina ladeada, Emilio Berra, de la Triple A argentina.

CEDIDA

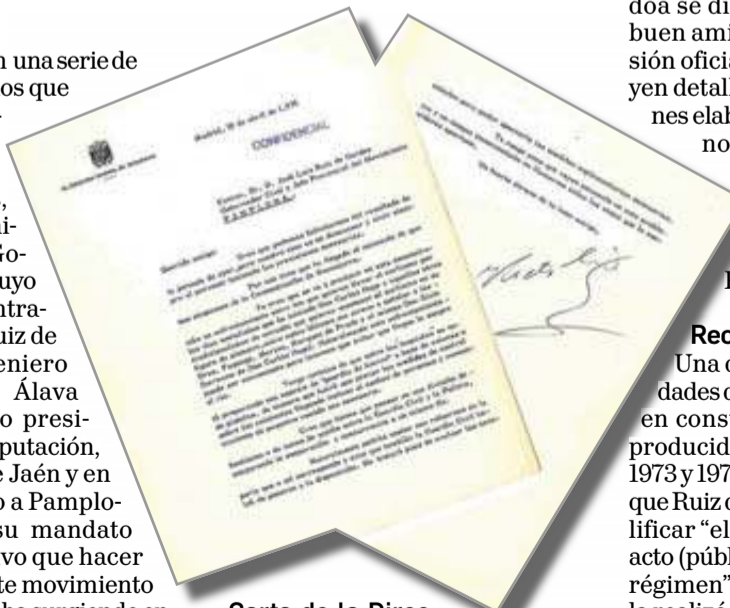
Nuevos documentos revelan que Montejurra 76 fue un plan del Estado contra el Partido Carlista

La versión oficial señalaba hasta ahora que había sido una "pelea entre hermanos", entre las dos alas del carlismo

MANUEL MARTORELL Pamplona

Los graves sucesos ocurridos el 9 de mayo de 1976 en Montejurra (en los que murieron dos personas) no fueron "una pelea entre hermanos", entre distintas corrientes del carlismo, como se ha mantenido oficialmente estos 46 años, sino un plan urdido en las esferas del Estado, con especial protagonismo de Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Gobernación, para acabar con la orientación progresista y democrática que el Partido Carlista había dado a esta concentración anual.

Así lo revelan una serie de documentos a los que ha tenido acceso *Diario de Navarra*, sobre todo informes, cartas y comunicaciones del Gobierno Civil, a cuyo frente se encontraba José Luis Ruiz de Gordo, ingeniero agrónomo de Álava que había sido presidente de esa diputación, gobernador de Jaén y en 1972 destinado a Pamplona. Durante su mandato (1972-1976), tuvo que hacer frente al potente movimiento obrero que estaba surgiendo en el Antiguo Reino y a la fuerte agitación política que vivía la comunidad foral, entonces una de las provincias de España donde el sentimiento antifranquista estaba más extendido, siendo igualmente uno



Carta de la Dirección General de Seguridad, calificada de "CONFIDENCIAL" y fechada el 19 de abril de 1976, en la que se insta al gobernador civil a concretar las previsiones para el día de Montejurra

de los periodos de mayor represión policial de toda la dictadura franquista.

Por todo ello, el rey Juan Carlos le concedió el 7 de mayo, dos días antes de los sucesos ocurridos cerca de Estella, la Gran Cruz de Isabel la Católica, como le comunicaría por carta el propio Fraga una semana después en atención a "los muchos y difíciles servicios prestados", encargándose de su tramitación el Ministerio de Exteriores de José María de Areilza. Estos documentos, en los que Ruiz de Gordo se dirige a Fraga como "mi buen amigo", desmontan la versión oficial de los hechos e incluyen detallados planes y previsiones elaborados desde el Gobierno Arias Navarro para arrebatar la concentración anual al partido liderado por Carlos Hugo de Borbón-Parma.

Reconquistar Montejurra

Una de las principales novedades de estos informes estriba en constatar que ya se habían producido otros dos intentos, en 1973 y 1974, para "reconquistar" lo que Ruiz de Gordo no duda en calificar "el mayor y más virulento acto (público) de España contra el régimen". La primera propuesta la realizó José María Oriol Urquijo, hermano del ex ministro de Justicia y presidente del Consejo de Estado, Antonio María Oriol. Consistía en llevar a Juan Carlos e incluso a Franco para acabar con la utilización política de la romería

religiosa por parte del Partido Carlista.

La segunda, realizada por la Hermandad del Maestrazgo, consistía, con el mismo objetivo, en que el propio gobernador civil se pusiera al frente de unas delegaciones organizadas por los ayuntamientos navarros, especialmente de la zona de la Ribera. En ambos casos, Ruiz de Gordo consideró totalmente inviables debido a la fuerza que había adquirido el carlismo progresista, defensor de la "vía autogestionaria" al socialismo.

Estos reparos desaparecieron ante la convocatoria de 1976, ya que en esta ocasión podían contar con la Unión Nacional Española (UNE), asociación legal que había aceptado los principios del Movimiento franquista y mostrado expresamente su acatamiento a la figura de Juan Carlos como futuro rey de España. Entre los fundadores de la UNE, había personalidades tradicionalistas, como los propios hermanos Oriol o Ramón Merino, que hacía años habían abandonado la disciplina del carlismo, e incluso algunos que, como Valiente o Zamanillo, habían manifestado su oposición a Franco tras la Guerra Civil pero habían terminado por apoyar al régimen debido a la línea socializante que los Borbón-Parma estaban imprimiendo a la antigua Comunión Tradicionalista.

En el informe que Ruiz de Gordo envía el 5 de enero de 1976, con sendas copias a los directores generales de Seguridad y Política Interior, ya plantea, tras reconocer el fracaso de los intentos anteriores, la posibilidad de "actuar" sobre algunos dirigentes carlistas para lograr ese año "una afluencia masiva de tradicionalistas que neutralizarán el peso del huguismo", acabando así con "una concentración subversiva contra el rey D. Juan Carlos I".

Oposición carlista

Otro documento de febrero se refiere a la labor "paciente" que se debe realizar, incluso "llegando a tocar hombre a hombre", para que el carlismo navarro abandonara su "hosca oposición" y se uniera a "nuestro futuro político" en torno a la figura de Juan Carlos I. El 21 de marzo, será Fraga quien manifieste a Ruiz de Gordo su preocupación por las actividades del Partido Carlista, a cuyo líder, Carlos Hugo, ha ordenado detener y expulsar de España dos días antes cuando intentaba regresar del exilio en Francia por el aeropuerto de Barajas. El 19 de abril será el director general de Seguridad quien le comunica en una carta con el membrete "CONFIDENCIAL" que "ha llegado el momento de que nos ocupemos de la concentración de Montejurra", señalando como "conveniente" un hipotético enfrentamiento entre el carlismo progresista y aquellos sectores más tradicionalistas que lideran

Miguel Fagoaga, Ramón Merino —ambos dirigentes de la UNE—, José Márquez de Prado, más conocido como Pepe Arturo, y Sixto de Brobón-Parma, opuesto radicalmente a la línea política de su hermano Carlos.

Dos días después, el 21 de abril el gobernador civil informa a Fraga de la reunión que ha mantenido esa misma jornada con Sixto y Pepe Arturo en el hotel Tres Reyes de Pamplona, a los que mostró “el deseo de ayudarles en la tarea de servicio a la patria que apuntaban”, tal y como le había adelantado por teléfono al ministro de Gobernación, siempre “de acuerdo con tus orientaciones”.

En esa reunión, calificada de “secreta” por ambas partes, su interlocutores le anuncian que tienen previsto otro encuentro con el director de Política Interior, le ratifican su lealtad a Juan Carlos como rey de España y, por primera vez, proponen el plan de ocupar —dos días antes, el 7 de mayo— la cumbre de Montejoyra y hacerse con el control de Irache para desactivar las proclamas “huguitas”, mientras desde las campas situadas tras el monasterio otros grupos organizados realizarían “trabajos de agitación” entre la masa de asistentes. Los contactos se mantienen hasta la misma víspera de la concentración, el sábado 8 de mayo, día en que Ruiz de Gordo se reúne con Ramón Merino, manteniendo ambos una conversación por teléfono con Juan Carlos, como aseguran personas próximas a la máxima autoridad gubernativa en Navarra.

Llegado el día de la concentración, el día 9 de mayo, la también llamada *Operación Reconquista* fracasó porque los organizadores, pese al apoyo gubernamental, no consiguieron movilizar masivamente ni siquiera a los sectores más tradicionalistas del carlismo, encontrándose con una fuerte e imprevista resistencia de los seguidores del Partido Carlista que, por miles, habían vuelto ese año a la “Montaña Sagrada” e iniciado el Via Crucis en honor de todos “los carlistas muertos por el ideal en los siglos XIX y XX”, tal y como reza en la Primera Estación.

Fue ante esta tesitura cuando los atacantes hicieron uso de sus armas, tanto en la cumbre como frente al Monasterio de Irache, provocando dos muertos y una treintena de heridos. Manuel Fraga, que ese día se encontraba fuera de España, dijo en un primer momento asumir la responsabilidad de lo ocurrido pero, poco después, cambió su versión de los hechos para afirmar que había sido “una pelea entre hermanos”, versión que se ha mantenido oficialmente durante estos 46 años. El año 2003, la Audiencia Nacional calificó lo ocurrido de acción terrorista, reconociendo a los dos muertos —Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos— como víctimas del terrorismo, con derecho a recibir las correspondientes compensaciones económicas.

En los sucesivos informes y atestados oficiales se confirma igualmente que había órdenes específicas para evitar la llegada de



Carta del gobernador civil a Manuel Fraga —también a la Dirección General de Seguridad— informando de la reunión mantenida el 21 de abril con Sixto y Pepe Arturo en el hotel Tres Reyes.

los militantes y seguidores del Partido Carlista, a los que se tilda de “subversivos” y violentos potencialmente, mientras que se debe facilitar el acceso a quienes, a bordo de vehículos particulares o autobuses, lleven las credenciales facilitadas por distintos gobiernos civiles, ya que esas personas iban a participar en una concentración “pacífica”.

No intervenir

También se reconoce en esos escritos que hubo indicaciones de la superioridad para no intervenir a no ser de que se registraran “enfrentamientos graves” y, de hecho, no se produjeron detenciones ni antes ni después de los incidentes, pese a quedar constancia en los atestados policiales de que en la cumbre había un centenar de Guerrilleros de Cristo Rey armados y al menos se habían detectado siete pistolas y un subfusil ametrallador entre quienes atacaron la concentración avanzando en formación militar desde el hotel Irache

hacia el Monasterio.

Los acontecimientos de Montejoyra causaron verdadera consternación nacional; la prensa señaló como responsable al gobierno Arias Navarro, aunque sin las pruebas que ahora salen a la luz. Profundamente desprestigiado por la masacre de Vitoria dos meses antes, el proyecto reformista de Arias —el famoso “Espíritu del 12 de Febrero”— resultó totalmente inviable. Dos meses después, el presidente de Gobierno que había sucedido a Franco era sustituido por Suárez, iniciándose así la Transición a la democracia.

En buena parte, estos documentos confirman la tesis defendida desde el principio por el Partido Carlista, para quien la *Operación*

Nuevos documentos revelan la implicación de Fraga en la llamada “Operación Reconquista”

Terroristas internacionales contratados por el Seced

- Los servicios secretos reclutaron a neofascistas italianos, activistas franceses o argentinos y expolicías de Chile o Portugal

M.M. Pamplona

Uno de los hechos más escandalosos de Montejoyra 76 fue la intervención de una serie de siniestros personajes, vinculados a grupos extremadamente violentos y al terrorismo ultraderechista internacional, en la montaña con mayor valor histórico y religioso del carlismo.

Entre estos ultraderechistas internacionales destacaban dirigentes de grupos neofascistas italianos, como Stefano Delle Chiaie o Loris Gattelli, ambos de Avanguardia Nazionale, o Elio Massagrande, Mauro Tedeschi, August

to Cauchi y Pietro Benvenuto di Fu, asociados a Ordine Nuovo. Algunos incluso tenían órdenes de extradición por parte de la Justicia italiana, que atribuyó a Nuevo Orden masacres como las de Bolonia (85 muertos), Piazza Fontana (17), tren Italicus (12) o Brescia (8).

Pero también había antiguos militantes franceses del Ejército Secreto (OAS), como Jean-Pierre Cherid, y de la Triple A argentina —García Almirón y Emilio Berra—, además de agente policiales que habían pertenecidos a la temible DINA del general Pinochet en Chile o a la PIDE portuguesa, disuelta por la Revolución de los Claveles de 1974.

Según declaró públicamente el general Sáenz de Santa María, alto mando de la Guardia Civil con los Gobiernos de Arias Nava-

Reconquista fue un plan para apartarles de la escena política y difundir una imagen de división y violencia extrema, vinculándoles asimismo a la ultraderecha, cuando este partido había sido uno de los fundadores, con el PCE, de la Junta Democrática y después de la denominada Platajunta, conservando todavía capacidad de convocatoria y organizativa, sobre todo en Navarra, mientras las corrientes más reaccionarias del carlismo habían dejado de tener presencia pública.

Se da la circunstancia de que aquel 9 de mayo, Adolfo Suárez, entonces ministro-secretario del Movimiento, tuvo que sustituir a Fraga del Ministerio de Gobernación, y que fue el Gobierno de Suárez quien decretó la Amnistía que libraría a todos los implicados de cualquier responsabilidad y quien rechazaría la legalización del Partido Carlista, que de esta forma no se pudo presentar, el 15 de junio de 1977, a las primeras elecciones democráticas.

ro y Adolfo Suárez, estas personas fueron reclutadas por el Servicio Central de Documentación (Seced), los servicios secretos creados por el almirante Carrero Blanco, y algunas de ellas fueron utilizadas después por los GAL para asesinar a miembros de ETA. En concreto, Cherid murió en marzo de 1984 cuando manipulaba un artefacto explosivo en Biarritz.

Massagrande y Benvenuto fueron detenidos junto al también ultra Sánchez Covisa en febrero de 1977 al descubrirse una fábrica de armas en la calle Pelayo de Madrid. Sánchez Covisa, vinculado a los Guerrilleros de Cristo Rey, ya aparecía implicado en el atentado de Begoña (agosto de 1942) contra la línea mayoritaria del carlismo a su regreso de combatir con la División Azul a favor de los nazis. Por su parte, Rodolfo García Almirón, de la Triple A, organización responsable de numerosos asesinatos en Argentina, trabajó durante varios años como guardaespaldas de Manuel Fraga Iribarne.

CLAVES

DOS MUERTOS Y UNA TREINTENA DE HERIDOS

Según el informe del teniente coronel de la Guardia Civil (521 Comandancia de Pamplona) enviado al gobernador con fecha de 12 de mayo —atestado 2528—, se calcula que, además de los dos fallecidos, hubo entre 25 y 30 heridos, no registrándose muchos nombres debido a que algunas personas fueron atendidas por medios particulares. De acuerdo con los autores del llamado “Libro Negro” de Montejoyra, de esa treintena de heridos, once lo fueron por impacto de bala.

LA LISTA DE NOMBRES QUE SE CONOCE ES LA SIGUIENTE:

Ricardo García Pellejero, de 20 años, de Estella, trabajador de la Fábrica de Curtidos; herida mortal de bala en el corazón.

Aniano Jiménez Santos, 40 años, de Santander, militante de la Hoac; herida mortal de bala en el abdomen.

Bernarda Urra Pagola, 17 años, de Aberin, herida de bala en glúteo derecho.

José Javier Nolasco Echeverría, de 19 años, de Estella y vecino de Pamplona. Uno de los disparos le destruyó un pie.

Jesús Vera Pardo, herida de bala en la ingle.

Ferrán Lucas Zaragoza, 36 años, de Barcelona, traumatismo craneal.

Jesús Erce Lizarraga, herida al ser golpeado con una porra.

Amalia López de Olarte, herida por golpe en la cabeza.

José María Ruiz, herida por golpe en la cabeza y contusión en el hombro.

José María Castellanos, herida en la cabeza.

Ángel Cuadrado Sánchez, sacerdote de Barcelona, herida en la cabeza.

Rafael Petrina Ciriza, contusión en la cabeza.

Mariano Zufía Sanz, herida por impacto de una piedra en Irache.

Mercedes (Maritxu) Olazarán Aristu, de Pamplona.

Miguel Ángel Apesteguía Ganuza.

Ministerios y fuerza pública, al servicio de la 'Operación Reconquista'

Se proponía comprar 2.000 "garrotas de campo" y que el Ministerio de Información asumiera la explotación propagandística del éxito

MANUEL MARTORELL
Pamplona

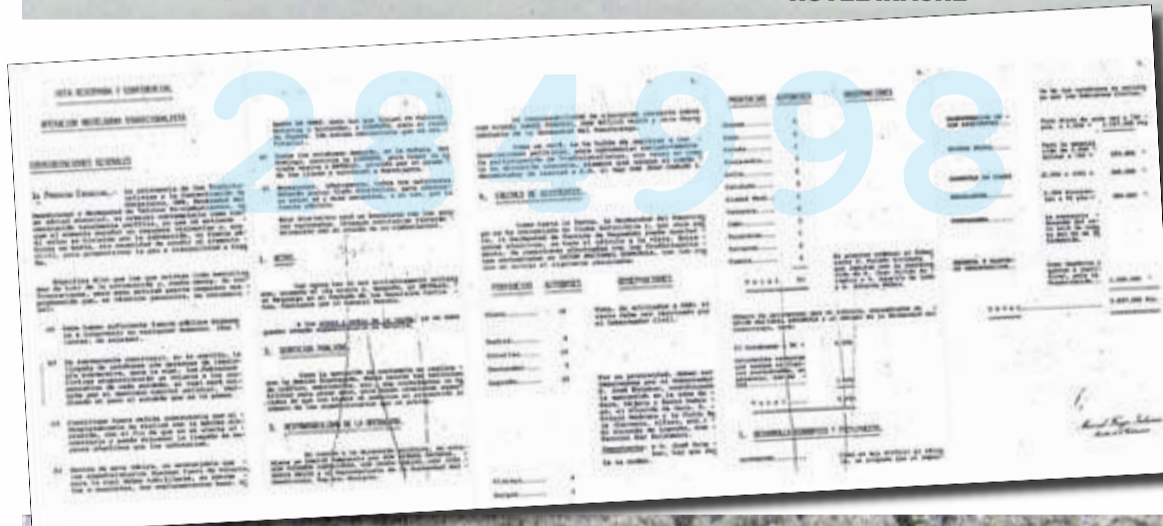
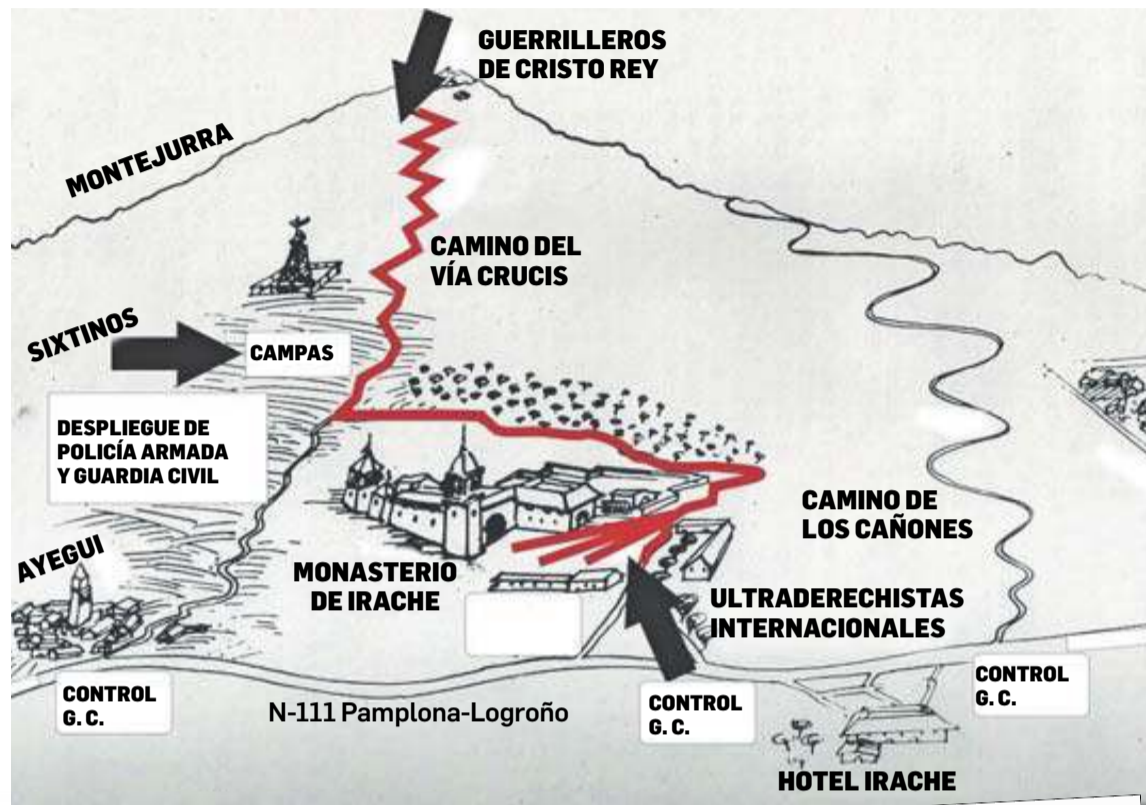
Para poner en marcha la *Operación Reconquista* y arrebatar la concentración de Montejurra al Partido Carlista el 9 de mayo de 1976, se preparó un detallado plan de carácter "reservado y confidencial" bajo la denominación "Montejurra Tradicionalista" que figura entre los documentos adscritos al Gobierno Civil con una tarjeta personal de Manuel Fraga, entonces ministro de Gobernación.

Este documento, de cinco páginas, hace explícitas referencias a la intervención de gobernadores civiles, alcaldes y policía, así como al uso de infraestructuras gubernativas al servicio de los atacantes. El informe comienza planteando como "premisa esencial" que los convocados por el plan gubernativo acudirán a una "concentración totalmente pacífica" mientras que a los partidarios de Carlos Hugo se les vincula con la "subversión" y un hipotético estallido de violencia, en cuyo caso será suficiente "la fuerza pública" para restaurar "la paz y tranquilidad", sin necesidad de que actúe el componente civil de la operación.

De todas las formas, se indica que esa concentración "pacífica" deberá contar con la protección de "suficiente fuerza pública dispuesta a intervenir en cualquier momento", especificando que "bastantes" de esos agentes deberán ir "de paisano". En total se calcula la llegada de un centenar de autobuses, fletados por los gobernadores civiles, y la asistencia de unas 5.600 personas, todas las cuales deberán llevar como distintivo un "brazalete con los colores nacionales", tanto para identificarse entre sí como para que "sean conocidos por la fuerza pública".

Para facilitar a los convocados el acceso a la montaña y, por el contrario, dificultar la llegada de los elementos subversivos, "los gobernadores civiles proporcionarán un volante a los responsables de cada autobús, el cual será exigido por el oportuno control policial, impidiendo el paso al autobús que no lo posea".

Igualmente se prevé habilitar "conventos o cuarteles" donde puedan pernoctar los expedicionarios: en Miranda de Ebro para los que vengan de Galicia, Asturias y Santander, y en Logroño para los del resto de España. "Todos los autobuses -se dice textualmente- deberán, en la mañana del



LOS DETALLES Arriba, esquema de Montejurra con la distribución (flechas negras) de los grupos atacantes y los controles de la Guardia Civil de acuerdo con el gráfico publicado en el llamado *Libro negro*. En medio, las cinco páginas del plan elaborado para la Operación Montejurra Tradicionalista con los detalles sobre la intervención de autoridades provinciales, locales y fuerzas del orden. Debajo, fotografía difundida tras los sucesos de Montejurra mostrando el despliegue de la Policía Armada y la Guardia Civil en las campas situadas tras el Monasterio.

domingo, reunirse en Logroño para hacer la entrada masiva a Estella, girando por el paseo de Los Llanos y volviendo a Montejurra"

El peso de la convocatoria apoyada por el Gobierno Arias Navarro recae en La Unión Nacional Española (UNE), asociación legalizada un año antes tras aceptar los Principios del Movimiento y mostrar lealtad al rey Juan Carlos, cu-

yos dirigentes se encargarán de la "dirección política", citando en concreto a Miguel Fagoaga, Ricardo Larráinzar, José María Melis y Ramón Merino. Por su parte, los hermanos Oriol Urquijo, igualmente fundadores de la UNE, garantizarían el desembolso de dinero para cubrir un gasto previsto de cinco millones y medio de pesetas, una suma muy elevada ese año de

1976. Se da la circunstancia de que Ramón Merino, persona próxima al rey Juan Carlos, se reunió en Pamplona con el gobernador civil de Navarra, Ruiz de Gordo, el 8 de mayo, víspera de la concentración.

El informe preparatorio no descarta la participación de tradicionalistas no asociados a la UNE, siempre que "tengan el común denominador de lealtad a S.M. el Rey

Don Juan Carlos I". Se prevé también entregar a todos los asistentes una dieta de 750 pesetas, así como comprar 2.000 garrotas de campo a 100 pesetas cada una, otras 2.000 boinas y 6.000 brazaletes, quedando la explotación propagandística del éxito ante la opinión pública a cargo del Ministerio de Información. Entre los gobernadores civiles colaboradores, se cita expresamente, además del de Navarra, a los de Álava, La Rioja y Cuenca, y, entre los alcaldes, a los de Haro, Logroño, Cervera y Alfaro.

Este plan civil se complementa con una "orden extraordinaria" para la policía y la Guardia Civil, en la que se vuelve a prevenir de los hechos violentos que podrían causar los seguidores del Partido Carlista, especialmente la "minoría joven radicalizada que aprovecharía cualquier circunstancia o incidente para provocar alteraciones de orden público y otros actos violentos", por lo que se pide prestar mayor atención a los vehículos ocupados por jóvenes, valorando, de acuerdo con las circunstancias o las credenciales que muestren, si pueden o no continuar el viaje.

Dichos controles se iniciarán dos días antes, el 7 de mayo, con el objetivo de "descubrir la llegada de grupos subversivos o elementos activistas", siempre en referencia a los partidarios de Carlos Hugo de Borbón-Parma, para lo que las fuerzas de Policía deberán realizar un estricto seguimiento de los hospedajes en Estella y pueblos de la zona, no dudando en hacer detenciones si se detectara la presencia de personas sospechosas.

El despliegue policial estará formado por la 64 Bandera de la Policía Armada, reforzada con dos compañías de reserva, y las fuerzas de la 521 Comandancia de la Guardia Civil (Pamplona), igualmente reforzadas con otras dos compañías y la vigilancia desde el aire de un helicóptero. Ese día también se concentrarán en Montejurra todos los policías secretos de Navarra -Pamplona, Tudela y puestos fronterizos- a los que ayudarán en su misión de infiltrarse entre la masa carlista otro medio centenar llegados de fuera. Por su parte, la Policía Municipal de Estella funcionaría como elemento de apoyo a la Fuerzas de Orden Público.

A todos ellos habrá que sumar los guardias civiles, camuflados de carlistas y calados con boina roja, que, según las declaraciones que hizo en su momento el general Sáenz de Santa María, manipularían los transmisores que la Guardia Civil tenía previsto entregar a los atacantes para establecer la comunicación entre las tres zonas donde pensaban actuar: la cumbre, con un centenar de "guerrilleros de Cristo Rey armados", los ultraderechistas internacionales que avanzarían hacia el Monasterio desde el "cuartel general" en el hotel Irache, igualmente armados, y los grupos partidarios de Sixto encargados de la agitación política en las campas situadas entre el Monasterio y el Camino del Vía Crucis.



Momento en que el gobernador civil de Navarra ayuda a un mando militar a cortar la cinta inaugural del aeropuerto de Noáin en julio de 1973. ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA



Dos de las publicaciones de la época que señalaban la existencia de responsabilidades muy superiores a la de Ruiz de Gordo.

Montejurra 76 fracasó porque el carlismo tradicionalista no respondió a la convocatoria

Para Ruiz de Gordo, gobernador civil de Navarra, "el enfrentamiento no debió pasar de la garrota de campo"

MANUEL MARTORELL Pamplona

El 15 de mayo de 1976, el gobernador civil de Navarra, Ruiz de Gordo, envía un amplio informe a su "buen amigo" Manuel Fraga, ministro de Gobernación, y al presidente de Gobierno, Arias Navarro, valorando lo ocurrido en Montejurra el 9 de ese mes, día en que dos personas fueron asesinadas y una treintena quedaron heridas durante el ataque de grupos armados a los carlistas seguidores de Carlos Hugo de Borbón-Parma.

Entre las novedades de este documento destaca la incapacidad de los convocantes para arrastrar a la masa tradicionalista. De acuerdo con los informes y atestados de la Guardia Civil, los sixtinos no pasaron de 600, cuando habían anunciado la asistencia de unas 6.000 personas, mientras los militantes y simpatizantes del Partido Carlista superaban con creces esa cifra.

Así lo explica el gobernador civil al afirmar que "la facción de D. Sixto llegó tarde, desorganizada y muy mermada en relación al cálculo que había efectuado la víspera", que su incidencia en Navarra resultó ser "muy débil" y que "elementos influyentes del tradicionalismo ortodoxo" dieron instruccio-

nes para que no se acudiera a la cita.

Respecto a la escasa respuesta que tuvo la *Operación Reconquista*, resulta significativo que en las comunicaciones de la Guardia Civil se constata que, entre las 11:30 y las 12 del mediodía, se tuvo que reforzar el despliegue en las campas tras el Monasterio, donde se inicia el Via Crucis, ya que, tras ser batida la zona de la cumbre por disparos de ametralladora, los seguidores del Partido Carlista comenzaban a descender del monte en masa y existía el peligro de que los grupos sixtinos allí concentrados fueran arrollados.

Según se desprende de este documento, todo salió mal, especialmente los controles selectivos que se habían previsto, debido a que se produjo una gran afluencia de personas en el intervalo de solo una hora y también a que los carlistas de Carlos Hugo habían conseguido pases de la Diputación Foral para acceder a las zonas de apartamiento. En su opinión, los controles policiales para impedir la llegada de "elementos subversivos" se tenían que haber establecido en las provincias de origen.

Sobre el uso de armas de fuego y los disparos, Ruiz de Gordo los califica de "hecho desgraciado" provocado por "varios desequilibrados e insensatos", y que el "con-

veniente" enfrentamiento, como se había considerado en informes anteriores, "no debió pasar de la garrota de campo".

De todas formas, Ruiz de Gordo insiste en que la concentración de Montejurra suponía "una ofensiva contra nuestro rey D. Juan Carlos I que no se debía tolerar" y citaba expresamente, como máximos responsables de esta posición a José María Zavala, secretario general del Partido Carlista, al dirigente navarro Mariano Zufía Urrizalqui, al

guipuzcoano Gabriel Zubiaga y también a Ignacio Romero Osborne, *marqués de Marchelina*, presidente de la Hermandad de Tercios de Requetés, que tampoco respaldó la convocatoria organizada desde el Gobierno con el apoyo de la UNE.

Marchelina, coronel de requetés condecorado por las heridas sufridas en la guerra, sería conocido esos años al retirarle el Gobierno la medalla conseguida en combate por solicitar públicamente la amnistía para los presos políticos y por crear, con varios mandos del Ejército Republicano, la Asociación de Excombatientes de la Guerra de España que, con el apoyo de conocidas personalidades del mundo de la política y la cultura, como Enrique Tierno Galván, Joaquín Ruiz-Giménez o Antonio Buero Vallejo, protagonizaron varios encuentros para fomentar la reconciliación entre los españoles.

Ruiz de Gordo fue la primera autoridad del Gobierno Arias Navarro a la que apuntó la investigación de los tribunales de Justicia para esclarecer lo ocurrido, ya que desde su Gobierno Civil se habían reservado las habitaciones del hotel Irache donde se concentrarían los grupos terroristas internacionales de ultraderecha. Tuvo que

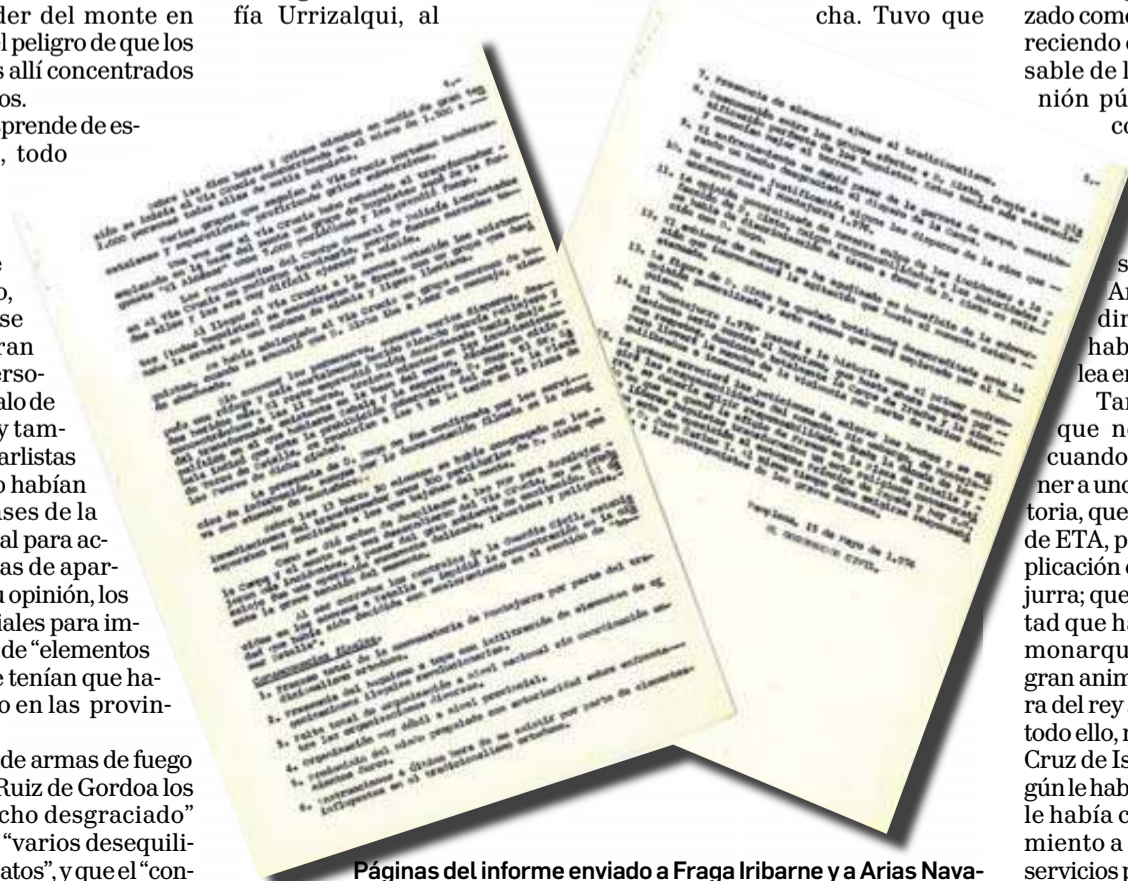
responder por escrito primero al juez de Estella y después al Tribunal de Orden Público desde el Gobierno Civil de Sevilla, su nuevo destino desde el mes de junio. En la capital andaluza, se encargó de dirigir la Transición y organizar las primeras elecciones democráticas un año después, para ser destituido en agosto de 1977 por el nuevo presidente de Gobierno, Adolfo Suárez.

Una de las primeras medidas de Suárez, que había sustituido a Fraga al frente de Gobernación aquel luctuoso 9 de mayo, fue decretar una amnistía que alcanzaba a todos los delitos políticos anteriores a diciembre de 1976, por lo que el proceso judicial que apuntaba a instancias muy superiores del Gobierno Arias, en concreto a la figura de Fraga y probablemente al propio Suárez, quedó interrumpido y anulado.

Ruiz de Gordo, ya sin nuevos cargos políticos, regresó a su Álava natal, donde volvió a ocupar su plaza de ingeniero agrónomo de la Diputación Foral. De allí había salido con una excedencia el año 1968 para dirigir los gobiernos civiles de Jaén, Navarra y Sevilla. Quienes le conocieron en vida murieron de un infarto fulminante en febrero de 1992 a los 70 años de edad -aseguran que se sintió utilizado como "cabeza de turco", apareciendo como principal responsable de lo ocurrido ante la opinión pública y los medios de comunicación en medio

de la grave crisis política que precipitaría el inicio de la Transición, mientras la amnistía salvaba al Gobierno de Arias Navarro tras difundir la idea de que aquello había sido solo de "una pelea entre hermanos".

También que se quejó de que no le pusieran escolta cuando la Policía supo, al detener a uno de sus comandos en Vitoria, que era objetivo preferente de ETA, precisamente por su implicación en los hechos de Montejurra; que la inquebrantable lealtad que había mostrado hacia la monarquía se convirtió en una gran animadversión hacia la figura del rey Juan Carlos I, y que, por todo ello, no quiso recoger la Gran Cruz de Isabel la Católica que, según le había comunicado Fraga, se le había concedido en agradecimiento a "los muchos y difíciles servicios prestados"



Páginas del informe enviado a Fraga Iribarne y a Arias Navarro el 15 de mayo con las valoraciones de Ruiz de Gordo.



Viñeta resumiendo lo ocurrido el 3 de diciembre de 1945 en la Plaza del Castillo. ADRIÁN PELÁEZ/LA AVENTURA DE LA HISTORIA

Informes oficiales califican al carlismo javierista de “sedicioso” contra Franco

Los documentos indican que los sucesos del 3 de diciembre de 1945 en Pamplona fueron una “manifestación subversiva de oposición al régimen”

MANUEL MARTORELL
Pamplona

Los documentos del Gobierno Civil que muestran la implicación de Manuel Fraga y otros altos cargos del Gobierno Arias Navarro en la Operación Reconquista de Montejurra en 1976 también revelan no-

vedades sobre importantes acontecimientos históricos del carlismo en Navarra. Eso es lo que ocurre con los graves sucesos de la plaza del Castillo el 3 de diciembre de 1945 que, hasta ahora, han generado división en su interpretación por los historiadores.

Ese día, los *javieristas*, partidarios de Javier de Borbón-Parma, también llamados *falcondistas* por Manuel Fal Conde, su principal dirigente, organizaron una gran concentración en Pamplona, en principio para festejar que “el príncipe Don Javier” hubiera salido vivo del campo de exterminio nazi de Dachau, donde había sido internado por la Gestapo acusado

de apoyar a la Resistencia Francesa. Sin embargo, el objetivo real era reivindicar la restauración de la monarquía.

En esa jornada de San Francisco Javier, patrón de Navarra, estalló un tiroteo cuando la Policía Armada intentó disolver la concentración. Los carlistas hicieron frente a los agentes, que se retiraron hacia los soportales de la Diputación. Entonces, un agente de paisano hizo un disparo contra la manifestación y los carlistas respondieron con sus armas, estallando un tiroteo con el resultado de ocho policías y varios carlistas heridos. La Justicia Militar abrió un proceso sumario y más de cien

personas fueron encarceladas en la Prisión Provincial, produciéndose una amplia redada policial en toda la ciudad para detener a quienes habían participado en los incidentes.

Algunas interpretaciones históricas defienden que aquello fue un estallido más de rebeldía de los requetés que se consideraban perdedores habiendo estado en “el campo de la victoria”; otras aseguran que aquellos hechos fueron una muestra más de la hostilidad existente entre carlistas y falangistas, o que se trató de una “lucha de poder dentro del régimen”. Sin embargo, una lectura detallada del proceso judicial así como de la documentación sobre Fal Conde conservada en el Archivo de la Universidad de Navarra revelan que fue un intento del entonces carlismo mayoritario para apartar del poder a Franco, y, por lo tanto, acabar con el régimen franquista.

El gobernador civil, Ruiz de Gordo, cuando envía en enero de 1976 al ministro de Gobernación sus previsiones para la concentración de Montejurra ese año, hace un repaso a la trayectoria del citado carlismo javierista en base a documentos e informes existentes en el Gobierno Civil, salvo en los casos de 1971 y 1972, sobre los que —dice textualmente— “no hemos encontrado antecedentes en los archivos relativos a estos dos años, que fueron de matiz muy conflictivo”.

En su introducción general realiza una serie de valoraciones sobre el carlismo navarro, diciendo, por ejemplo, que “no se habían despojado de sus prejuicios partidistas”, que ante la Unificación (FET y de las JONS) se habían dividido en dos tendencias: los colaboracionistas que seguían a Rodezno y los falcondistas o javieristas, “totalmente opuestos a la Unificación”. “Muchos excombatientes —añade— siguen a Fal Conde por instinto o por inercia de oponerse a todo lo constituido” y siguen a unos “dirigentes de espíritu caciquil a la antigua usanza”, además de responsabilizar a “su integrista hoscó y hurraño de sacristía pueblerina” de que “amplios sectores” no hubieran sentido “nunca vinculación a la empresa común” liderada por Franco.

Después y refiriéndose en concreto a los incidentes de la plaza del Castillo, recuerda que “la oposición del carlismo al régimen por obra y gracia de Fal Conde adquirió cuerpo el día de San Francisco Javier de 1945” cuando “los falcondistas pretendieron celebrar una concentración en Pamplona con periodistas y observadores extranjeros para exponer (a las naciones europeas) la potencia del carlismo frente al Régimen”. “Se trataba de reunir a 30.000 personas”, teniendo como objetivo “asaltar diversos centros oficiales”, entre los que estarían ayuntamientos navarros, la propia Diputación e incluso el Gobierno Civil. En una nota que Juan Junquera, gobernador civil, envía al gobernador militar el 24 de noviembre le solicita “apoyo y colaboración” para “desbaratar una maniobra contra S. E.

el Jefe del Estado que se cristalizaría en una concentración el próximo 3 de diciembre”.

También señalan esos informes que desde la Catedral, donde se había celebrado una misa de “acción de gracias” por la liberación del “príncipe regente”, partió una “manifestación subversiva” hacia la plaza del Castillo, donde interrumpieron el concierto de la Banda Municipal por no querer tocar el Oriamendi. Entonces, dicen los informes, “se oyeron los primeros mueras a Franco”, que luego se repetirían dentro del Círculo Carlista de la plaza del Castillo, donde Zamanillo, uno de los dirigentes falcondistas de entonces, se refirió al Gobierno de Franco como un “régimen peor que el de la República”.

Testimonios de personas que participaron en aquellos acontecimientos, como el filósofo y profesor universitario Arturo Juncosa, confirman el carácter antifranquista de aquella concentración, que contó con la colaboración de varios generales, entre ellos García Valiño, siempre con el objetivo sustituir la dictadura de Franco por una monarquía tradicional que reconciliara España con la Europa que acababa de vencer al fascismo en la II Guerra Mundial.

Igualmente se hace mención en esa retrospectiva sobre la posición política del carlismo javierista a lo ocurrido tras el atentado perpetrado por un comando falangista contra una concentración carlista en el Santuario bilbaíno de Begoña el año 1942, con más de un centenar de personas heridas, tres de las cuales fallecieron más tarde debido a las complicaciones provocadas por la metralla.

De nuevo refiriéndose a este sector mayoritario del carlismo, los informes dicen que aprovecharon aquel atentado y “el caldo de cultivo” de una “economía reducida a cenizas” en “plena guerra mundial” para poner en marcha “un movimiento sedicioso contra el régimen”, iniciando una campaña para lograr “la dimisión de todos los ayuntamientos navarros para seguir después con las provincias Vascongadas”.

Tampoco dejan esos informes de recordar, para demostrar que la dinastía Borbón-Parma era francesa y no tenía nada que ver con España, las acusaciones de la Gestapo contra Don Javier por apoyar a los “terroristas” y “comunistas” de la Resistencia Francesa, y el hecho de que Mussolini les hubiera confiscado sus propiedades en Italia en 1940 por ser “súbditos enemigos” de Francia. Igualmente y con el mismo objeto, se reproducen las declaraciones realizadas por el propio Franco al diario falangista *Arriba* el 28 de febrero de 1955 calificando a los javieristas de ser un “diminuto grupo de integristas seguidores de un príncipe extranjero apartados desde primera hora del Movimiento (Nacional) sin eco en la nación”. “Ayer —señala otro documento del 23 de febrero de 1976— estuvieron contra el Caudillo y su Gobierno; hoy sus ataques se centran contra S. M. el rey Don Juan Carlos I y su primer Gobierno”.